

**JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA**

EXPEDIENTE: SX-JDC-752/2025

ACTORA: ALFA CITLALLI ÁLVAREZ
VÁZQUEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ

MAGISTRADA PONENTE: EVA
BARRIENTOS ZEPEDA

SECRETARIA: DANIELA VIVEROS
GRAJALES

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a tres de diciembre
de dos mil veinticinco.

S E N T E N C I A que resuelve el juicio para la protección de los
derechos político-electorales de la ciudadanía promovido por **Alfa
Citlalli Álvarez Vázquez** a fin de controvertir la sentencia emitida el
pasado siete de noviembre, por el Tribunal Electoral de Veracruz en el
procedimiento especial sancionador **PES/102/2025**, en la que
determinó que no se actualizaba la violencia política por razón de
género denunciada.

Í N D I C E

SUMARIO DE LA DECISIÓN	2
ANTECEDENTES.....	2
I. El contexto	2

II. Trámite del juicio federal.....3

CONSIDERANDO4

PRIMERO. Jurisdicción y competencia4

SEGUNDO. Requisitos de procedencia.....5

TERCERO. Estudio de fondo6

RESUELVE20

SUMARIO DE LA DECISIÓN

Esta Sala Regional determina **confirmar** la sentencia controvertida, al resultar **infundados** e **inoperantes** los agravios expuestos. Ello es así porque el Tribunal responsable realizó un análisis exhaustivo respecto de la violencia política por razón de género denunciada; sin embargo, la actora fue omisa en controvertir de manera puntual y suficiente las consideraciones desarrolladas por dicho órgano jurisdiccional.

ANTECEDENTES

I. El contexto

De lo narrado en la demanda y demás constancias que integran el expediente, se advierte lo siguiente:

1. **Queja.** El treinta de mayo de dos mil veinticinco¹, la comisión de quejas del Organismo Público Local Electoral de Veracruz² radicó la

¹ En adelante las fechas corresponden al presente año.
² En adelante OPLEV.



queja y se reservó la admisión y el emplazamiento, al considerar necesario realizar diversas diligencias para mejor proveer.

2. Medidas de protección y cautelares. El dos de junio, el grupo multidisciplinario del OPLEV determinó que el nivel de riesgo en el caso concreto era bajo, de ahí que no fueran propuestas las medidas de protección; por su parte el cuatro de junio, se determinó tener por no presentada la solicitud de medidas cautelares al resultar genéricas.

3. Sustanciación de la queja. El diez de junio, se ordenó el cierre de investigación y la comisión de quejas del OPLEV instauró el procedimiento especial sancionador³ en contra de las personas denunciadas; el diecinueve de junio, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos. En esa misma fecha se remitió al Tribunal Electoral de Veracruz⁴ el expediente.

4. Sentencia impugnada. El siete de noviembre, el Tribunal local dictó sentencia en la que determinó la inexistencia de la violencia política por razón de género⁵ alegada por la actora.

II. Trámite del juicio federal

5. Demanda. El dieciocho de noviembre, la actora promovió de manera directa ante esta Sala Regional el presente juicio.

6. Turno y requerimiento. En la misma fecha, la magistrada presidenta de esta Sala Regional ordenó integrar el expediente **SX-JDC-752/2025** y turnarlo a la ponencia a cargo de la magistrada Eva

³ En adelante PES.

⁴ En adelante Tribunal local, autoridad responsable o TEV.

⁵ En adelante VPG.

Barrientos Zepeda. Asimismo, requirió al TEV el trámite de ley correspondiente.

7. Recepción. El veinticinco de noviembre, El Tribunal local remitió a esta Sala Regional las constancias relacionadas con el trámite de ley.

8. Sustanciación. En su oportunidad, la magistrada instructora acordó radicar y admitir la demanda y, después, al encontrarse debidamente sustanciado el juicio, declaró cerrada la instrucción, con lo que los autos quedaron en estado de dictar sentencia.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia

9. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, **por materia:** al controvertirse una sentencia emitida por el TEV en la que declaró inexistente la VPG alegada; **por territorio:** ya que dicha entidad federativa pertenece a esta circunscripción⁶.

SEGUNDO. Requisitos de procedencia

⁶ Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo tercero, base VI, 94, párrafo primero, y 99, párrafos primero, segundo y cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 251, 252, 253, fracción IV, inciso c), 260, párrafo primero, y 263 fracción IV, inciso c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y de los artículos 3, apartado 2, inciso c, 4, apartado 1, 79, 80, apartado 1, inciso f, y 83, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, (en adelante Ley General de Medios).



10. El medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia⁷, como se expone a continuación.

11. **Forma.** La demanda se presentó por escrito, consta el nombre y firma autógrafa de quien promueve, se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; asimismo, los hechos y los agravios.

12. **Oportunidad.** Se cumple porque la sentencia controvertida fue notificada a la actora el **doce de noviembre**; por ende, si la demanda fue presentada el **dieciocho de noviembre siguiente**, su presentación es oportuna⁸.

13. **Legitimación e interés jurídico.** Se satisfacen dichos requisitos, ya que la actora promueve el presente juicio por propio derecho. Además, fue quien promovió el medio de impugnación que dio origen al acto controvertido; asimismo, indica que la sentencia impugnada le genera una afectación a su esfera de derechos⁹.

14. **Definitividad.** Se cumple debido a que no hay medio impugnativo que agotar previamente.

TERCERO. Estudio de fondo

a. Pretensión y método de estudio

15. De una lectura integral al escrito de demanda presentado por la actora se advierte que su pretensión final es que esta Sala Regional

⁷ En términos de lo establecido en los artículos 7, apartado 2, 8, apartado 1, 9, 79, apartado 1, y 8 de la Ley General de Medios.

⁸ Lo anterior, sin contar quince y dieciséis de noviembre al ser días inhábiles.

⁹ Lo anterior, con sustento en la jurisprudencia 7/2002, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO".

revoque la sentencia impugnada, a fin de que, en plenitud de jurisdicción, se tenga por acreditada la VPG cometida en su perjuicio.

16. Su causa de pedir la sustenta en la supuesta falta de exhaustividad, congruencia interna y externa, violación al principio de legalidad, error judicial, así como la falta de juzgamiento con perspectiva de género al declarar la inexistencia de VPG.

17. Ahora bien, debido a que los agravios de la actora están dirigidos a demostrar que, en el caso, la sentencia del TEV no es ajustada a Derecho, al no tener por acreditada la VPG por actos cometidos en su contra, el estudio se realizará de manera conjunta, a partir de la pretensión señalada¹⁰.

b. Contexto de la controversia

18. El origen del presente asunto se dio con la presentación de una queja por parte de la actora en contra de diversas regidurías que integran el ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz, las cuales, a su consideración, cometían actos de VPG en su perjuicio.

19. La denunciante manifestó que, desde su toma como presidenta municipal del ayuntamiento de Martínez de la Torre, ha sido objeto de una conducta sistemática de obstrucción por parte de las regidurías.

20. Sostuvo que en diversas sesiones de cabildo el resto de la integración votaba en contra sus propuestas con la intención de entorpecer el cumplimiento de sus obligaciones municipales.

¹⁰ De conformidad con el criterio sostenido en la jurisprudencia 4/2000, de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.



21. Argumentó que con el presidente municipal anterior siempre se aprobaban por unanimidad los acuerdos; ahora la diferencia con ella deriva de su condición de mujer.

22. No obstante, el Tribunal responsable determinó que no se acreditaba la VPG denunciada.

c. Consideraciones del TEV

23. El Tribunal local llevó a cabo la resolución del PES y determinó que no se actualizaba a VPG denunciada por las siguientes consideraciones:

- De las manifestaciones realizadas por las regidurías durante las sesiones de cabildo, no se advirtió que hayan sido de naturaleza violenta en ninguna de sus modalidades
- Las intervenciones se realizaron en un tono institucional, sin expresiones ofensivas, descalificaciones personales ni alusiones a estereotipos de género en contra de la presidenta
- En relación con los cinco elementos jurisprudenciales para tener por acreditada o no la VPG la responsable sostuvo que únicamente se acreditaron el primero y el segundo; es decir, que las conductas denunciadas sí se vincularon directamente en el ejercicio de las funciones de la actora como presidenta municipal y que estas fueron atribuidas a las regidurías integrantes del ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz.
- Respecto al resto de los elementos no los tuvo por acreditados al no advertir que las conductas denunciadas hayan tenido como finalidad obstaculizar el ejercicio del cargo de la promovente, ni que se hayan buscado perjudicar sus derechos político-electorales
- Las manifestaciones de las regidurías -durante las sesiones- estuvieron encaminadas a cuestionar aspectos técnicos del ejercicio presupuestal; la entrega oportuna de documentación para estar en posibilidad de votar de manera

informada; el presunto mal estado de las obras públicas; el indebido manejo de la basura en el municipio, así como la integración de diversos comités municipales

- En ninguna de las intervenciones se identificó un trato desigual, una descalificación estereotipada o una afectación que trascendiera el marco deliberativo propio del órgano edilicio
- La denunciante únicamente aportó como prueba principal las certificaciones de las actas de cabildo, cuyo contenido fue valorado por el TEV sin que de ellas se desprendiera la existencia de expresiones, patrones o comportamientos para presumir la acreditación de VPG
- La denunciante no acompañó elementos objetivos que permitieran establecer un parámetro válido entre la gestión del ex alcalde y ella, y que existiera un trato diferenciado por ser mujer
- La denunciante no aportó medios de convicción que permitieran acreditar la existencia de una reunión privada donde supuestamente las regidorías le solicitaron bonos económicos extraordinarios
- Concluyó que las expresiones que fueron objeto de análisis tuvieron un contenido técnico-administrativo vinculado con la función pública, de ahí que se declarara inexistente la VPG denunciada.

d. Planteamientos de la actora

24. La actora señala que la sentencia impugnada carece de exhaustividad, congruencia y vulnera los principios de legalidad, garantías judiciales, así como la protección judicial, pues, en su estima, dejó de observar diversos criterios jurisprudenciales emitidos por el TEPJF que están relacionados con VPG.

25. Afirma, que la falta de exhaustividad radica en que el TEV dejó de analizar a fondo los agravios planteados, aunado a que en la instrucción del asunto no realizó las investigaciones rigurosas.



26. Por otra parte, la promovente afirma que el TEV trastocó el equilibrio procesal pues no aplicó la reversión de la carga de la prueba, como debe realizarse en asuntos relacionados con VPG y descontextualizó las pruebas aportadas de la violencia denunciada.

27. La actora transcribe diversos fragmentos de la sentencia¹¹ y afirma que las personas denunciadas no aportaron prueba alguna que desvirtuara lo imputado, sino que únicamente les otorgó valor probatorio a sus dichos, sin tomar en cuenta las pruebas que ella aportó, conforme a los criterios jurisprudenciales que, –reitera– resultaban aplicables.

28. Indica que el TEV debió analizar la atención urgente de las medidas de protección conforme los estándares internacionales en materia de derechos humanos, así como ser exhaustivo en la instrucción del asunto.

29. De igual forma, aduce como agravio que, en su estima, los hechos denunciados son constitutivos de VPG, tales como la no aprobación de las propuestas que presentó la actora ante el cabildo, cuestión que afirma no se daba con su antecesor, por lo que solicita se analicen dichos hechos.

30. Asimismo, la promovente afirma ser víctima de violencia institucional, al sostener que las conductas atribuidas a las regidurías generan que el ayuntamiento incumpla con sus funciones orgánicas y administrativas y que, frente a dicho supuesto incumplimiento, ella, en

¹¹ Visibles de la foja 59 a la 87 del escrito de demanda.

su calidad de presidenta municipal, sea considerada como la principal responsable.

31. Finalmente, la promovente aduce que el Tribunal responsable dejó de lado el juzgar con perspectiva de género, ya que al tratarse de un asunto donde se invoca la posible comisión de VPG, los actos impugnados deben considerarse de tracto sucesivo como lo ha sostenido este Tribunal Electoral a través de diversos precedentes¹².

e. Decisión

32. A juicio de esta Sala Regional los argumentos son **ineficaces** porque si bien la actora manifiesta que la autoridad responsable vulneró, entre otros, los principios de exhaustividad y congruencia, lo cierto es que solo lo hace de manera genérica y reiterativa, sin que controvierta de manera directa las consideraciones expuestas en la sentencia controvertida, como se explica a continuación.

f. Justificación

Principios de exhaustividad y congruencia

33. El principio de exhaustividad impone a las personas juzgadas, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la *litis*, en apoyo de sus pretensiones¹³.

¹² En su escrito de demanda señala los precedentes SX-JDC-330/2020, SX-JE-3/2021 y acumulados, SX-JE-155/2021 y acumulados, y SX-JDC-410/2021, entre otros.

¹³ Lo anterior, encuentra sustento en las jurisprudencias 43/2002 de rubro: **PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN** y la 12/2001 de rubro: **EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE**.



34. Por su parte, el principio de congruencia establece la obligación de que las resoluciones cumplan con dos requisitos: 1) **congruencia interna**, consistente en que la resolución sea congruente consigo misma, es decir, que las resoluciones no contengan consideraciones o afirmaciones que se contradigan entre sí; y, en su caso, 2) **congruencia externa**, que se traduce en la concordancia entre lo resuelto y la *litis* planteada; esto es, que la resolución no distorsione lo pedido o lo alegado en defensa, sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes¹⁴.

Juzgar con perspectiva de género

35. En lo que atañe al deber de juzgar con perspectiva de género, es indispensable que, ante una problemática relacionada con la interpretación y la consecuente aplicabilidad de la norma, las personas juzgadoras evalúen su impacto diferenciado y cuestionen su neutralidad, a partir del derecho de igualdad¹⁵.

36. En la Guía para Juzgar con Perspectiva de Género en Materia Electoral de la Red Mundial de Justicia Electoral, se precisa que la norma debe leerse en clave de género, a fin de determinar si una norma aparentemente neutra tiene efectos diferenciados para hombres y mujeres y, a partir de ello, debe dimensionarse su alcance, sentido y aplicación, dando lugar a una reinterpretación, para incorporar a las mujeres en el discurso jurídico.

¹⁴ Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 28/2009, de rubro “**CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA**”.

¹⁵ Tal como se establece en la Jurisprudencia 1ª/J. 22/2016 (10ª.), de rubro: **ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO**, así como en la Guía para Juzgar con Perspectiva de Género en Materia Electoral de la Red Mundial de Justicia Electoral.

37. Bajo esa tesitura, la obligación de juzgar con perspectiva de género implica que se debe adoptar el criterio interpretativo que garantice el principio de igualdad, promueva la participación política de las mujeres y elimine cualquier discriminación histórica o estructural por razón de género, de modo tal que no se restrinja el efecto útil de la interpretación de dichas normas y su finalidad, en atención a que, de manera general, las disposiciones normativas sustantivas se encuentran formuladas en términos neutrales para ambos géneros.

g. Caso concreto

38. En el caso, de la sentencia controvertida se advierte que, contrario a lo manifestado, el Tribunal local cumplió con su deber de realizar una valoración completa, integral y conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica respecto de los hechos denunciados por la promovente, así como del caudal probatorio del PES.

39. En la resolución controvertida se aprecia que el Tribunal local describió cada medio de prueba, precisó su origen, valoró su eficacia demostrativa y señaló de qué manera contribuía o no a acreditar los hechos denunciados, lo que evidencia un ejercicio de motivación suficiente.

40. Asimismo, este órgano jurisdiccional advierte que la responsable realizó una valoración contextual de los hechos denunciados. Este estándar ha sido reiterado por la Sala Superior de este Tribunal al establecer que los casos relacionados con posibles actos de VPG deben analizarse considerando el contexto en que ocurren, a fin de determinar



si existe un elemento basado en el género que coloque a la mujer en una situación de desventaja.

41. El Tribunal local, una vez analizado el material probatorio, identificó cuáles hechos se encontraban acreditados y cuáles no, donde explicó de manera razonada por qué ciertos señalamientos carecían de respaldo objetivo o no alcanzaban la fuerza necesaria para generar una convicción probatoria.

42. Es decir, el TEV analizó los hechos acreditados conforme lo indicado en la jurisprudencia 22/2024 de rubro **“ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN EL LENGUAJE. METODOLOGÍA PARA SU ANÁLISIS”**, por lo que precisó: a) el contexto en el que se emitió el mensaje; b) las expresiones objeto de análisis; c) la semántica de las palabras; d) el sentido de las palabras del mensaje a partir del momento y lugar en que se emiten; y e) la intención en la emisión del mensaje.

43. Asimismo, aplicó el test de los cinco elementos precisados en la jurisprudencia 21/2018 de rubro: **“VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO”**, sobre los hechos acreditados.

44. Especialmente, se advirtió que no existían elementos que demostraran que los actos denunciados tuvieron como finalidad obstaculizar el ejercicio del cargo de la actora por razones de género, sino que se trataban de intervenciones en las sesiones de cabildo, que se mantuvieron en tono deliberativo con énfasis en la transparencia y rendición de cuentas.

45. En este sentido, el Tribunal responsable concluyó correctamente que ninguna de las personas denunciadas incorporaran expresiones, conductas, patrones o estereotipos dirigidos específicamente a la actora por su condición de mujer, tampoco se advirtió la intención de limitar u obstaculizar su participación política bajo un parámetro de desigualdad por razón de género.

46. Por tanto, la conclusión del Tribunal local —en el sentido de que no se actualizaba la existencia de la VPG alegada— deviene de un ejercicio analítico completo, objetivo y detallado del conjunto probatorio, el cual, fue suficiente para generar certeza sobre la verdadera naturaleza de los hechos denunciados.

47. A partir de lo anterior, esta Sala Regional concluye que no le asiste la razón a la actora al sostener que el TEV vulneró el principio de exhaustividad. Ello es así porque, como se explicó previamente, el Tribunal local sí analizó los planteamientos formulados por la promovente en la instancia respectiva, sin que en este juicio se controviertan de manera específica tales consideraciones.

48. Lo mismo ocurre respecto de la supuesta vulneración al principio de congruencia, pues la actora no precisa en qué parte de la sentencia se actualiza la incongruencia alegada, ni señala cuáles aspectos resultarían contradictorios o discordantes entre lo pedido y lo resuelto.

49. En consecuencia, sus argumentos resultan **inoperantes**, pues no controvierten de manera eficaz las razones expuestas por el TEV —ya reseñadas—, sino que únicamente se limitan a reiterar que dicho órgano no fue exhaustivo ni congruente, que omitió analizar las



pruebas ofrecidas y que no ordenó investigaciones rigurosas. Sin embargo, la actora no precisa a qué pruebas se refiere ni cuáles diligencias adicionales debieron ordenarse, lo que impide otorgar eficacia a sus planteamientos.

50. Para este órgano jurisdiccional resulta insuficiente que la actora se limite a transcribir los párrafos contenidos de la página 7 a la 35 de la sentencia controvertida, pues dicha transcripción, por sí sola, no constituye una refutación concreta ni eficaz de las consideraciones adoptadas por el órgano jurisdiccional responsable.

51. Además —se insiste—, el TEV efectuó un análisis dirigido a determinar si los hechos acreditados podían constituir VPG. Para ello examinó las expresiones realizadas por las regidurías en cada una de las sesiones de cabildo, sin que de dichas manifestaciones se advirtieran agresiones, ofensas o descalificaciones en contra de la actora por su condición de mujer.

52. Aunado a lo anterior, del escrito de demanda tampoco se desprende por qué, a juicio de la promovente, las intervenciones de las regidurías en las sesiones de cabildo, así como la manera en que emitieron su voto, constituyen VPG en su contra.

53. En consecuencia, si bien en estos juicios opera la suplencia de la queja —la cual permite corregir, completar o integrar argumentos expuestos de manera defectuosa para sustentar la modificación o revocación del acto impugnado- ello no implica sustituir a la parte accionante en la carga argumentativa que le corresponde.

54. Por otra parte, también es ineficaz el argumento relativo a que indebidamente dejó de revertirse la carga probatoria, pues se trataron de actos públicos y la actora no justifica de forma alguna en qué consistía la dificultad probatoria de los hechos o en la naturaleza de los mismos a fin de aplicar la referida reversión.

55. Asimismo, esta Sala Regional no pasa por alto que la promovente sostiene como agravio que la autoridad administrativa electoral debió analizar la atención urgente de las medidas de protección conforme a estándares internacionales en materia de derechos humanos.

56. Sin embargo, dicha alegación es **inoperante** por genérica, al no expresar la actora cuál es la causa de pedir ni señalar concretamente qué parámetro internacional considera vulnerado.

57. Finalmente, en lo que respecta a los planteamientos de la actora relativos a que fue víctima de violencia institucional y a que la conducta de las regidurías era distinta cuando su antecesor ejercía el cargo, resultan **inoperantes**, por tratarse de una reiteración de lo ya expuesto y analizado por el TEV. Además, de tales manifestaciones no se desprende argumento alguno que controvierta la supuesta ilegalidad que ahora pretende hacer valer ante esta instancia.

58. En consecuencia, los agravios de la actora resultan **infundados** e **inoperantes** pues no logran desvirtuar las consideraciones expuestas por el Tribunal responsable; de ahí que lo conducente sea **confirmar** la sentencia controvertida.



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

SALA REGIONAL
XALAPA

SX-JDC-752/2025

59. Similar criterio adoptó esta Sala Regional en los juicios SX-JDC-745/2025 y SX-JDC-749/2025.

60. Finalmente, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Regional, para que en caso de que con posterioridad se reciba documentación relacionada con el trámite y sustanciación de este juicio, se agregue al expediente para su legal y debida constancia.

61. En su oportunidad, devuélvanse las constancias atinentes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

62. Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

ÚNICO. Se **confirma** la sentencia impugnada.

NOTIFÍQUESE como en Derecho corresponda.

En su oportunidad, **devuélvanse** las constancias atinentes y **archívese** este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron, por **unanimidad** de votos, las magistraturas integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, ante la secretaria general de acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con el numeral segundo del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se

SX-JDC-752/2025

implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.